

do por la Señora Doña Dolores Tejeda de Ecala, á fin de que se declare prescrita la accion hipotecaria á que dicho juicio se refiere, puesto que el objeto último de ese juicio, viene á versar sobre el capital de cinco mil pesos y réditos correspondientes, garantizado todo con la hipoteca que reporta la expresada hacienda "Yurica el Grande," y cuyo capital y réditos, han sido denunciados por los Sres. Rojas.

Que en virtud de ese interés, y con arreglo á lo dispuesto en la ley de 14 de Febrero de 1826 y artículo 97 de la Constitucion general de la República; los tribunales federales son los competentes para conocer de esa clase de negocios, y en el presente, por incidencia, el Juez 1º de Distrito de esta Capital.

Por estos fundamentos, y de conformidad con lo pedido por el Sr. Fiscal, se declara: que el mencionado Juez 1º de Distrito de México, es el competente para seguir conociendo del juicio promovido por la Señora Doña Dolores Tejeda de Ecala, en representacion de su hija Doña Elena, á fin de que se declare prescrita la accion hipotecaria que reporta la hacienda nombrada "Yurica el Grande" como garantía del capital impuesto en ella desde el año de 1803 y fué denunciado por los Sres. Rojas.

Remítanse las actuaciones al Juez 1º de Distrito de esta Capital, con copia certificada de ésta sentencia para los efectos consiguientes. Remítase copia igual al Juzgado 1º de Letras de Querétaro para su conocimiento. Hágase saber y archívese á su vez el Toca.

Así por unanimidad de votos lo decretaron los CC. Presidente y Magistrados que formaron la 1ª Sala de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, y firmaron.—*José María Iglesias.*

—*Miguel Auza.*—*Juan J. de la Garza.*

—*Ignacio Altamirano.*—*Simón Guzman.*

—*Luis M. Aguilar,* secretario.

Es copia que certifico. México, 5 de Setiembre de 1874.—*Lic. Enrique Landa,* oficial mayor.

## AMPARO

*Promovido ante el Juzgado de Distrito de Tamaulipas por el C. Tirso García, contra una sentencia pronunciada en su contra por el Juez de 1ª instancia de Ozuluama, confirmada por el Tribunal de Justicia del Estado de Veracruz, condenándolo por el delito de vagancia al servicio de las armas.*

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. Juez de Distrito.

De este expediente resulta, que Tirso García, fué consignado al servicio militar en virtud de sentencia formal pronunciada por el C. Juez de 1ª instancia del Canton de Tampico de Veracruz, y confirmada por el Tribunal Superior del mismo Estado. Así consta por la copia autorizada de la sentencia de dicho Tribunal, que corre á fojas 11.

Parce á primera vista que en el presente caso se encuentran en pugna dos principios. Uno és, que siendo el servicio militar profesion y no pena, á nadie debe condenarse á que lo preste, por que esto es poner de igual condicion á los criminales y á los CC. honrados que estan en él; segun esto, procede el amparo á favor de Tirso García, por que aunque éste declarado vago, debia castigársele con otra cosa que no fuera el servicio militar.

El otro principio es, que no cabe amparo en negocios judiciales, conforme al artículo 8º de la ley relativa.

Que el de Tirso García, es de esta clase no puede ponerse en duda, supuesta la sentencia que corre en autos. Luego es improcedente el que ha intentado.

El Fiscal, no obstante lo que dijo en su pedimento anterior, se inclina á este último extremo, y pide á V. que provea en ese sentido.

La Constitucion general reconoce la independencia de los Estados en su régimen

interior; alguno de estos, por lo mismo, puede declarar *pena* lo que generalmente esta reputado como *profesion*. Así lo ha hecho el Estado de Veracruz en su ley de jurados, fecha 26 de Setiembre de 1868, cuyo artículo 81 dice á la letra: "Los reos del delito de vagancia, si fuésen robustos, sanos y de edad competente, serán castigados con el servicio de las armas por cinco años....." Igual cosa ha declarado en varios artículos de su código penal, citados en la sentencia de García.

Cree el suscrito que con tanta mas razon puede un Estado declarar *pena* el servicio militar, cuanto que, por las circunstancias de ser forzado ese servicio, ya no puede considerarse como *profesion*. Así tambien, cualquier oficio de los que se desempeñan en una carcel ó penitenciaría, en sí mismo es un trabajo honesto como el de cualquier ciudadano en el pleno goce de sus derechos; pero desde el momento en que ese oficio se desempeña por la fuerza ya no puede dudarse de que es un castigo, á causa del sufrimiento que produce toda coaccion.

Eso exactamente sucede en el caso de Tirso García. Está en el servicio militar por fuerza, y la mejor prueba de ello, es la peticion que hace para libertarse de tal servicio. Es pues una verdadera pena la que esta sufriendo; esa pena le fué aplicada por autoridad judicial competente; es evidente por lo mismo, que ha pedido amparo en un negocio judicial.

En tal virtud, el suscrito pide á V. que lo niegue, con fundamento del artículo 8º de la ley de 20 de Enero de 1869.

Tampico, Junio 1º de 1874.—*Lic. Modesto Ortiz.*

#### *Sentencia del C. Juez de Distrito.*

Tampico, Junio 3º de 1874.—Visto el presente juicio de amparo promovido por Francisca Saldaña en nombre de su esposo Tirso García, contra la providencia del C.

TOMOVII.—PARTE II.

Juez de 1ª instancia de Ozuluama que lo consignó al servicio de las armas en el Batallon número 2 de línea, por considerar que ella viola en la persona de su citado esposo, las garantías otorgadas al hombre en los artículos 5º y 20 de la Constitución federal; visto el informe del C. Gefe del Batallon número 2, rendido el 16 de Abril del año corriente, y los documentos que por vía de justificacion remitió el 15 de Mayo último; el pedimento fiscal y las demas constancias de autos.

Resultando: que Tirso García fué juzgado y sentenciado al servicio de las armas, por el Juzgado de Ozuluama, Estado de Veracruz; que su causa fué en revision al Tribunal Superior de aquel Estado, quien confirmó la sentencia de vista en la parte que consigno á García al servicio de las armas; que expedida la condena de estilo, el ejecutivo previno á la Jefatura política del Canton de Ozuluama, la remision del sentenciado al Batallon número 2 de guarnicion en este Puerto, cuyos hechos resultan de los documentos presentados por el C. Gefe del expresado Batallon, pues la parte no produjo pruebas de su acerto.

Considerando: que si bien ordinariamente el servicio de las armas es por su naturaleza y debe reputarse profesion y no pena, cuando se impone á un individuo contra su voluntad lo es propiamente, por que le dá tal carácter la coaccion, de la misma manera que el trabajo no es pena, y si lo es el trabajo forzado.

Que no hay violacion de la garantía otorgada al hombre por el artículo 5º de la Constitución general, cuando por razon de delito se le impone como obligatoria la prestacion de algun servicio personal; por que la pena no constituye violacion de los derechos del hombre, siempre que esté previamente designada por la ley como correctivo de alguna falta ó delito, que sea impuesto por autoridad competente y con las garantías y formalidades de un juicio, artículos 4º y 14.

Que en el caso en cuestion, Tirso García fué sentenciado al servicio de las armas por la autoridad judicial, que es competente para imponer penas propiamente tales, artículo 21; que lo sentenció por medio de procedimientos del Orden jurídico y aplicando penas de leyes dadas con anterioridad, por cuyo motivo tampoco puede llamarse violada la garantía consignada en el artículo 20 invocado por el quejoso.

Considerando: que los Estados de la Federacion, independientes en su régimen interior, artículo 40, pueden señalar cuales son las penas que deban imponerse á los delitos cometidos en su territorio, sin mas limitacion que la establecida en la citada Constitucion por su artículo 22; que el de Veracruz ha podido en consecuencia, establecer como tal pena la del servicio militar, y la autoridad judicial aplicarla á Tirso García sin violacion de las garantías otorgadas en los artículos 5º y 20 de la Constitucion, en su nombre invocadas.

Por tales fundamentos, definitivamente juzgando, fallo: que la justicia federal no ampara ni protege á Tirso García, contra las disposiciones en cuya virtud fué consignado al servicio militar en el Batallon número 2. Notifíquese; devuélvase al C. Coronel del expresado Batallon los documentos que exhibió, dejando de ellos copias certificadas; y sacadas las copias de esito de la sentencia, remítase este juicio á la Suprema Corte para su revision.

El C. José Manuel Jureáguí Juez interino del Distrito del Estado, así lo decretó, mandó y firmó. Doy fé.—*Lic. José Manuel Jureáguí.* —Una rúbrica.—*José C. Aguirre.*—Una rúbrica, secretario.

Es copia que certifico sacada de su original. Tampico, Junio 10 de 1874.—*José G. Aguirre,* secretario.

### *Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.*

México, Julio 13 de 1874.—Visto el juicio de amparo promovido por el C. Tirso García ante el Juzgado de Distrito del Estado de Tamaulipas, contra su consignacion al servicio de las armas, en el batallon número 2, en virtud de una sentencia pronunciada en su contra por el Juzgado de 1ª instancia de Ozuama y confirmada por el Tribunal de Justicia del Estado de Veracruz, condenándolo por el delito de vagancia, y conforme con las prevenciones del Código penal del Estado, al servicio de las armas en uno de los cuerpos de la Federacion. Visto el informe de la autoridad ejecutora del acto reclamado; lo pedido por el C. Promotor fiscal; la sentencia del inferior negando el amparo, y cuanto mas de autos consta y se tuvo presente, y Considerando: que el artículo 22 constitucional prohíbe de una manera terminante las penas inusitadas entre las que se debe considerar el trabajo forzado en el ejército; que la carrera militar en ningún caso debe considerarse propia para extinguir penas por crimen alguno; que por la misma razon debe considerarse anticonstitucional y contrario á la prevencion del artículo 5º de la Carta fundamental de la República, lo determinado en el artículo 526 del Código penal del Estado de Veracruz, por el que se condenó al quejoso al servicio de las armas por tiempo indefinido; que la aplicacion del referido artículo fué errónea, en virtud de que él condena al servicio en el ejército permanente y no al servicio permanente en el ejército.

Por estas consideraciones, y con fundamento de los artículos constitucionales citados, se decreta: que es de revocarse y se revoca la sentencia del Juzgado de Distrito del Estado de Tamaulipas que negó el amparo al quejoso y se declara: que la Justicia de la Union ampara y protege al C. Tirso García, contra la sentencia que lo con-

donó al servicio forzoso de las armas, por tiempo indeterminado.

Devuélvanse los autos al Juzgado de su origen con copia certificada de esta sentencia; publíquese y archívese á su vez el Toca.

Así por unanimidad de votos lo decretaron los CC. Presidente y Ministros que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, y firmaron.—*José María Iglesias.*—*M. Auza.*—*José María Lozano.*—*José Arteaga.*—*Ignacio Ramírez.*—*M. de Castañeda y Nájera.*—*S. Guzman.*—*M. Zuvala.*—*José García Ramírez.*—*Enrique Landa*, secretario.

Es copia que certifico. México, Agosto 14 de 1874.—*Lic. Enrique Landa*, oficial mayor.

## AMPARO

*Promovido ante el Juzgado de Distrito de Durango, por el Lic. Ladislao L. Negrete en representación de los Sres. Delius Hermanos, contra las providencias dictadas por el Ayuntamiento y Gefe Municipal del Peñon Blanco, por las que se mandó destruir el bordo que se había levantado en la presa de la Fábrica de Belem.*

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. Juez de Distrito.

El Gefe Superior de Hacienda encargado de llevar la voz fiscal, dice: que los Sres. Delius Hermanos, piden amparo contra la providencia del Ayuntamiento del Peñon Blanco, que mandó destruir el bordo levantado por la Administracion de la Fábrica de Belem, de que son arrendatarios, sobre la presa en que se recoje el agua que dá movimiento á la espresada Fábrica. Esa providencia del Ayuntamiento, dicen los promoventes, ha violado en sus personas las garantías que otorgan los artículos 16 y 27

de la Carta fundamental de la República.

Las pruebas que ha presentado la parte quejosa consisten en las declaraciones de varios testigos, por las cuales consta, que para tomar el agua suficiente al movimiento de la Fábrica, se ha acostumbrado elevar algo el bordo de la presa, cuando escasea el agua. Así mismo consta por esas declaraciones de sus testigos contestes, que la misma agua con que se dá movimiento á la maquinaria, vuelve al cauce del arroyo y sigue su curso para los demás usos que de ella hacen los que la necesitan mas abajo de la presa.

El informe del gefe municipal y demás recados que á él se acompañan, contradicen el contenido de las pruebas de la parte quejosa. El gefe municipal asegura, que nunca, hasta que ingresó á la Fábrica el actual administrador, se había levantado el bordo de la presa: deduciendo en consecuencia, y aun asegurando tambien, que la Fábrica no necesita mas agua que la que recoge la presa. Estos recados que se acompañan, consisten en la exposicion de un gran número de los habitantes de la Municipalidad, que se quejan de los graves perjuicios que les ocasiona el hecho de levantar el bordo de la presa, mas de lo establecido cuando ésta se construyó.

Tanto las pruebas de la parte quejosa cuanto los recados presentados por el gefe municipal, demuestran claramente, por la contradiccion en que unas y otras se encuentran y por el tenor de los escritos respectivos, que cada cual cree haber procedido conforme al derecho que le compete. El quejoso cree tener derecho para aumentar el bordo, mientras el Ayuntamiento tambien cree tener derecho para impedir que el expresado bordo se aumente. Este punto aparece contencioso, y por lo mismo es indispensable que se sujete á la decision de las autoridades judiciales. Entre tanto esto no suceda, el Ayuntamiento no puede proceder por las vias de hecho á destruir el bordo, por que viola con tales hechos los artí-